JUZGADO CUARENTA LABORAL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., septiembre ocho (08) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Acción de tutela promovida por la señora [REDACTED] contra la Alcaldía Mayor de Bogotá y otros. Radicado 2021-00255-00.

Agotado el trámite del asunto, y no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede el despacho a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

ANTECEDENTES

DERECHOS INVOCADOS: Solicita la actora que se le ampare su derecho fundamental de petición en conexidad con el derecho a la administración de justicia.

PERSONA O ENTIDAD CONTRA LA QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN: Alcaldía Mayor de Bogotá -Área de gestión de peticiones ciudadanas, Fiscalía General de la Nación – Subdirección de gestión documental, Policía Nacional -Grupo de Gestión Documental, Estación de Policía de Engativá, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Dirección de servicios y atención, Medicina Legal – área de PQRSD- y Comisaría Décima de Familia de Engativá 1.

PRETENSIÓN: Ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Medicina Legal y Policía Nacional dar respuesta de fondo a la solicitud presentada ante cada entidad, con números de radicados 1355872021 del 28/04/21, 20216170389142 del 28/04/21, 1762562337 del 05/05/2021 y 2021DG-GNSC00962 del 28/04/2021, respectivamente (no se cuenta con el número de radicado de la petición hecha ante la Policía Nacional) (pág. 6 a 23 pdf. 003).

HECHOS RELEVANTES: Como fundamento del amparo constitucional, en síntesis, se relacionaron los siguientes:

1. La accionante informa que estuvo casada con el señor Edgar Parra y que durante el desarrollo de la relación fue víctima de maltrato físico por parte de su cónyuge, por lo que en diferentes oportunidades entre 1986 al 2015 solicitó ayuda a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Medicina Legal.
2. Indica que el pasado 28 de abril del año en curso, elevó derecho de petición a la Alcaldía de Bogotá, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Medicina Legal, sin que a la fecha de presentación del amparo constitucional, las entidades aludidas dieran respuesta de fondo a su petición. Respecto de las contestaciones recibidas afirma:

- i) Que el 04 y 07 de junio del año en curso recibió respuestas de la Policía Nacional, sin embargo considera que las mismas no dan solución de fondo a su petición (pág. 31 a 35, pdf. 003).
- ii) Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar remitió respuesta el día 06 de julio de 2021, la cual no responde de fondo sus pedimentos (pág. 29 y 30, pdf. 003).
- iii) Que el 25 de junio de 2021 recibe respuesta de la Fiscalía General de la Nación por medio de la cual se le informa que no aparecen registros de vinculación a procesos penales (pág. 27 y 28, pdf. 003).

TRÁMITE PROCESAL

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 25 de agosto de 2021 (archivo pdf 005 del expediente digital) y fue notificada a la Alcaldía Mayor de Bogotá -Área de gestión de peticiones ciudadanas, Fiscalía General de la Nación – Subdirección de gestión documental, Policía Nacional -Grupo de Gestión Documental, Estación de Policía de Engativá, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Dirección de servicios y atención, Medicina Legal – área de PQRSD- y Comisaría Décima de Familia de Engativá 1, tal y como consta en archivos pdf 007 a 018 del expediente digital; de otra parte, se comunicó la existencia de la presente acción constitucional a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- (pdf. 006).

CONTESTACIÓN:

- La Comisaría Décima de Familia de Engativá -Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá rinde informe el pasado 26 de agosto de 2021 por intermedio del Comisario de turno (pdf. 020), en los siguientes términos:
 - Indica que el 30 de mayo de 2021 se dio respuesta a lo solicitado por la accionante, no obstante, allegado el escrito tutelar se traslada la solicitud de desarchivo al archivo central.
 - Anexa comunicación del 30 de mayo de 2021 dirigido a la accionante, en donde se indica que una vez consultado el sistema SIRBE se aprecian los siguientes registros: que el 23/02/2008 con RUG 1103/2008 atendiendo la manifestación de conflicto se citó a las partes para el 08/05/2008, que el día 19/12/2021 con RUG 6936/2011 la usuaria solicitó citar a su compañero asignándose citación para el 17/01/2012, y que el día 11/11/2013 con RUG 7800/2013 se brindó apoyo policivo y remisión a medicina legal (pág. 4 a 17, pdf. 020).

- Finalmente, solicita negar las pretensiones invocadas por la accionante alegando la configuración de hecho superado por carencia actual del objeto.
- La Fiscalía General de la Nación presentó contestación el 27 de agosto de 2021 por intermedio de la Subdirectora de Gestión Documental y la Coordinadora Grupo de Peticiones de Información sobre procesos penales (pdf. 022 y 024, respectivamente) así:
 - Informa que consultado el sistema de Gestión Documental Orfeo se evidencia que el día 28 de abril de 2021 se recibió derecho de petición con el número de radicado 20216170389142 (pág. 3 a 6, pdf. 022).
 - Afirma que la funcionaria Muños Uribe dio respuesta a la petición el 19 de mayo de 2021, comunicándole a la ciudadana que una vez consultados los sistemas misionales SPOA y SIJUF con el nombre y cédula de la petente, NO se encuentran registros de vinculación a procesos penales por los hechos narrados en el escrito tutelar (pág 7 y 8, pdf. 022 y pág. 8 y 9, pdf. 024).
 - Asegura que se realizó consulta en los sistemas LIBRADI y PRODASIG sin encontrar registro alguno, por ende reiteró la respuesta inicial dada a la ciudadana, indicándole que en caso de contar con más información como radicado y/o autoridad que le recibió sus denuncias lo podía allegar a la Dirección Seccional Bogotá.
 - Solicita declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
- El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses allegó informe el 27 de agosto de 2021, por intermedio del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, de la siguiente manera (pdf. 023):
 - Indica que el día 30 de abril de 2021 con radicado 2021DG-GNSC00962 se recibe petición solicitando, entre otros, *"copia de los reportes de medicina legal que reporten lesiones personales sufridas a mi persona"*.
 - Aduce que mediante oficio n° 477339 del 04 de mayo del 2021 se brindó respuesta a la ciudadana, a su turno afirma que la citada comunicación fue notificada a la dirección de correo electrónico ana62janeth@gmail.com el 06 de mayo de 2021.
- La Policía Nacional -Metropolitana de Bogotá- arrió escrito el 30 de agosto de 2021, por intermedio del Jefe de Oficina de Asuntos Jurídicos (pdf. 026), así:
 - Señala que mediante comunicaciones n° GS-2021-228345-MEBOG y n° GS-2021-231810-MEBOG del 4 de junio y 7 de junio de 2021, respectivamente, se dio respuesta a la solicitud radicada por la accionante el 20 de mayo de 2021

(pág. 4 a 8, pdf. 026).

- Solicita declarar la carencia actual del objeto por la ocurrencia de un hecho superado.
- La Alcaldía Mayor de Bogotá rindió informe el pasado 30 de agosto de 2021 por intermedio de la Oficina Asesora de Jurídica en los siguientes términos (pdf. 025 y carp. 028):
 - Comunica que la solicitud presentada por la actora fue registrada en la plataforma Web “Bogotá Te escucha” con el número 1355872021, y la misma fue trasladada por competencia a la Secretaría Distrital de Integración Social, asignándose la petición a la Comisaría de Familia Engativá.
 - Precisa que el 30 de mayo de 2021 con radicado de salida SIAC 135587202, la Comisaría 10 de Familia de Engativá dio respuesta definitiva a la solicitud elevada por la ciudadana, la que fue enviada al correo electrónico ana62janeth@gmail.com.
 - Solicita su desvinculación del trámite constitucional, toda vez que no tiene competencia funcional para resolver la solicitud de la accionante,
- El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar presentó contestación el 30 de agosto de 2021 por intermedio de apoderada judicial, (pdf. 027) así:
 - Indica que el 5 de mayo de 2021 la actora radicó petición al buzón atencionalciudadano@icbf.gov.co, la cual fue registrada bajo el trámite SIM No.1762562337.
 - Informa que el 6 y 21 de mayo de 2021 se brindó respuesta a la ciudadana, indicándosele que la solicitud sería trasladada a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, considerando que estas son las entidades competentes para resolverla, lo anterior fue comunicado al correo electrónico ana62janeth@gmail.com (pág. 65, pdf. 027).
 - Solicita declarar improcedente la acción de tutela frente a su representada, aduciendo la configuración del hecho superado e inexistencia de la vulneración.

CONSIDERACIONES

La acción de tutela se estableció como un mecanismo para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia y, la misma fue reglamentada en el Decreto 2591 de 1991, que señaló las reglas básicas de su aplicación. Es así como el artículo 6º de dicha normativa delimitó

su procedencia para situaciones en las cuales no existieran recursos o mecanismos judiciales ordinarios salvo que fuera interpuesta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cual no obsta para que se analice en cada caso si el procedimiento correspondiente resulta eficaz de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas.

PROBLEMA JURÍDICO corresponde al despacho resolver lo siguiente:

¿Acreditó la Alcaldía Mayor de Bogotá -Área de gestión de peticiones ciudadanas - Comisaría Décima de Familia de Engativá-, Fiscalía General de la Nación - Subdirección de gestión documental, Policía Nacional -Grupo de Gestión Documental y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Dirección de servicios y atención, Medicina Legal - área de PQRSD, a efectos de declarar la figura del hecho superado, haber dado respuesta de fondo a la solicitud que dio origen a la presente acción y notificado en debida forma el contenido de la misma a la accionante?

DERECHO DE PETICIÓN

El artículo 23 de la Constitución Política consagra como derecho fundamental de petición, aquel que tiene toda persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución, dicha norma está reglamentada por los artículos 13 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificados por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, así: *“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma”*.

Así mismo, dicha normatividad desarrolla el derecho de petición en su artículo 14, señalando que como regla general toda petición debe resolverse en el término de 15 días hábiles, exceptuando las peticiones de documentos e información que deben resolverse en 10 días y las consultas, las cuales tienen prescrito un término de 30 días; y que, cuando no fuere posible resolverla en dicho término, deberá informarse de inmediato lo pertinente al interesado (antes del vencimiento del término señalado en la ley), exponiéndole las razones del caso y dándole a conocer el término razonable para resolverla, el cual no podrá exceder del doble del término inicialmente previsto. Sobre el tema el Tribunal Constitucional colombiano ha señalado que las autoridades peticionadas deben informar los inconvenientes y el tiempo en que se dará respuesta cuando no se pueda resolver en el plazo establecido: *“En relación con el término legal para suministrar respuesta, esto es, el plazo que tiene la administración o el particular para resolver las peticiones formuladas, debe consultarse al artículo 14° de la ley 1437 de 2011 que señala el término de quince días para dar respuesta a la petición. “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción”. De no ser posible, antes de que se cumpla con el plazo allí dispuesto y ante la imposibilidad de suministrar la contestación en dicho término, la autoridad o el particular deberán explicar*

los motivos y señalar una nueva fecha en el cual se realizará. Para este efecto, el criterio de razonabilidad será determinante, ya que es imperioso tener en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud". (Sentencia T-369 de 2013).

Aunado a ello, en pronunciamiento posterior, la Corte mediante la sentencia T- 903 de 2014 indicó que: "(...) la jurisprudencia constitucional ha entendido que cuando se trata de salvaguardar el derecho fundamental de petición, el ordenamiento jurídico no prevé un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz distinto de la acción de tutela, motivo por el cual quien resulte afectado por la vulneración de este derecho puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional". Así las cosas, se tiene que, no existiendo otro instrumento judicial para proteger el derecho de petición, por tratarse de un derecho fundamental cuya aplicación es inmediata, el mecanismo más adecuado es la acción de tutela.

Por otra parte, la honorable Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha considerado que el elemento esencial del mismo radica en la resolución pronta y oportuna por parte de la autoridad a quien se dirige la solicitud y en el derecho que le asiste al solicitante a obtener una respuesta de fondo, independientemente de que el sentido de la decisión sea positivo o negativo. Así entonces, luego de nada serviría dirigirse a una autoridad en particular con la esperanza de una respuesta pronta y eficaz, si ésta no resuelve dentro de los términos legales, o, cuando a pesar de hacerlo el contenido de la respuesta es vago, impreciso o se reserva el sentido de la decisión.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional el núcleo esencial de este derecho reside en i) una resolución pronta y oportuna; ii) una respuesta de fondo, lo que implica que sea clara, precisa, congruente y consecuente; y iii) la notificación al peticionario (T-154 de 2018):

(i) Resolución pronta y oportuna. Es una obligación de las autoridades y de los particulares responder las peticiones en el menor tiempo posible, sin exceder el término de 15 días hábiles establecido en la ley, salvo excepciones legales.

(ii) Respuesta de fondo o material, requisito que se cumple siempre que la contestación sea: a) clara, esto es, que la misma sea inteligible y que contenga argumentos de fácil comprensión; b) precisa, de manera que la respuesta atienda directamente a lo solicitado por el ciudadano y que se excluya toda información impertinente y que conlleve a respuestas evasivas o elusivas; c) congruente, es decir, conforme con lo solicitado; y d) consecuente con el trámite en el que la solicitud es presentada".

(iii) Notificación de la decisión. Este requisito se satisface poniendo en conocimiento del ciudadano la respuesta de la autoridad o del particular, pues de ello se deriva la posibilidad del peticionario de presentar la respectiva impugnación.

No obstante lo anterior, el Decreto 491 de 2020, en su artículo 5 (declarado condicionalmente exequible mediante sentencia C-242 de 2020) estableció:

“...Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales...”

Siendo del caso mencionar que debido a la actual condición sanitaria mundial, ocasionada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, el gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, ecológica y social en todo el territorio, y a la par, el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó a través de la Resolución 1315 del 27 de agosto de 2021 la emergencia sanitaria declarada, hasta el 30 de noviembre de 2021. Esto significa que mientras la emergencia sanitaria se encuentre vigente, las peticiones presentadas dentro de ésta, o que se encuentren en curso, por regla general deberán ser resueltas dentro de los 30, 20 o 35 días siguientes a su recepción, dependiendo el caso.

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO

En múltiples pronunciamientos la Corte Constitucional ha considerado que cuando es evidente que lo solicitado en la tutela ya fue cumplido, se presenta el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, como quiera que la finalidad de la acción de tutela se extingue al momento en que cesa la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados. Así dispuso la Corte Constitucional mediante sentencia T-146 de 2012:

“Se ha entendido que la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, se encuentra que la situación expuesta en la demanda, que

había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, ha cesado, desapareciendo así toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos fundamentales. De este modo, se entiende por hecho superado la situación que se presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela o de su revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestran que la vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha cesado".

CASO CONCRETO:

Frente a los hechos que sirvieron de fundamento a la presente acción constitucional, este despacho judicial advierte lo siguiente:

Se encuentra acreditado que la accionante interpuso derecho de petición ante la Alcaldía de Bogotá, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Medicina Legal, (pág 2 y 6 a 23 pdf. 003 del expediente digital), en los siguientes términos:

"...me permito solicitar,i) copia de las denuncias efectuadas relacionadas con la violencia doméstica ii) copia de las solicitudes de auxilio relacionadas con la violencia doméstica iii) copia de los reportes de las autoridades que intervinieron en los casos de violencia doméstica iv)copia de las historias clínicas que reporten lesiones personales sufridas a mi persona v) copia de los reportes de medicina legal que reporte lesiones personales sufridas a mi persona vi) la demás información que tenga relacionada con lo expuesto en la presente solicitud ..."

Por su parte, La Alcaldía Mayor de Bogotá rindió informe el pasado 30 de agosto de 2021 por intermedio de la Oficina Asesora de Jurídica, solicitando su desvinculación del trámite constitucional, toda vez que no tiene competencia funcional para resolver la solicitud, comunicando que remitió la misma oportunamente a la Secretaría Distrital de Integración Social, quien por medio de la Comisaría 10 de Familia de Engativá 1 procedió a dar respuesta (pdf. 025 y carp. 028).

Al respecto, La Comisaría Décima de Familia de Engativá -Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá 1 rinde informe (pdf. 020), en los siguientes términos:

- Indica que el 30 de mayo de 2021 se dio respuesta a lo solicitado por la accionante, afirmando que una vez consultado el sistema SIRBE se aprecia que el 23/02/2008 con RUG 1103/2008 atendiendo la manifestación de conflicto se citó a las partes para el 08/05/2008, que el día 19/12/2021 con RUG 6936/2011 la usuaria solicitó citar a si compañero, asignándose citación para el 17/01/2012, y que el día 11/11/2013 con RUG 7800/2013 se brindó apoyo policivo y remisión a medicina legal (pág. 4 a 17, pdf. 020). Anexando los soportes respectivos.

En efecto, adjunto a la contestación se encontró comunicación del 30 de mayo de 2021 (pág. 4 y 5, pdf. 020), así como los anexos respectivos visibles a páginas 8 a 17 del archivo pdf. 020 del expediente digital, los cuales fueron dados a conocer en debida forma a la petente, al momento de presentarse la contestación de la tutela al correo electrónico ana62janeth@gmail.com, tal y como consta a página 01 del pdf. 027 del expediente digital.

En atención a lo anterior, teniendo en cuenta que la Alcaldía Mayor de Bogotá acreditó que dio traslado de la petición a la entidad competente, y que esta última emitió respuesta de fondo a lo solicitado, se considera que dentro del trámite de esta acción se cubrió el núcleo esencial de su derecho fundamental de petición, habiéndose igualmente acreditado su notificación en legal forma, por lo que se declarará la carencia actual del objeto por hecho superado frente aquella autoridad.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación presentó contestación el 27 de agosto de 2021 afirmando que la funcionaria Muños Uribe dio respuesta el 19 de mayo de 2021 a la petición que da origen al trámite tutelar, comunicándole a la ciudadana que una vez consultados los sistemas misionales SPOA y SIJUF, con los datos suministrados por la accionante (nombre y número de cédula), NO se encuentran registros de vinculación a procesos penales (pág 7 y 8, pdf. 022 y pág. 8 y 9, pdf. 024), y en igual sentido adjuntaron el oficio radicado n° 20212220027061 suscrito por Andrea del Rosario Marín Bernate (pág. 07, pdf. 022); de otro lado, indica que posteriormente fueron consultados los sistemas LIBRADI y PRODASIG sin encontrarse coincidencia, motivo por el cual reiteró la respuesta inicial, así mismo que se le indicó a la peticionaria que en caso de contar con más información como radicado y/o autoridad que le recibió las denuncias podía allegarla a la Dirección Seccional de Bogotá.

Al respecto, encuentra este despacho judicial que la actora en su solicitud de amparo adjunta el oficio n° 20212220027061 suscrito por Andrea del Rosario Marín Bernate que da razón de la consulta realizada en los sistema SPOA y SIJUF, por medio del cual se le indica que no se encuentra registro de vinculación a proceso penal alguno. Sobre el particular advierte este despacho judicial que la accionante solicitó “copia de las denuncias por ella elevadas”, y la respuesta dada, mediante oficio n° 20212220027061, se limita a informarle que consultado los sistemas SPOA y SIJUF no se encuentra registro de proceso penal donde se encuentre vinculada, siendo evidente que la respuesta dada no atiende directamente lo solicitado. De otro lado, la accionada afirmó que amplió la respuesta y realizó consulta en los sistemas LIBRADI Y PRODASIG, sin embargo no aporta copia de la misma y mucho menos que las resultados de dicha consulta hayan sido informadas a la ciudadana.

Por lo anterior, se considera vulnerado el derecho fundamental de petición, al no encontrarse acreditado que la autoridad hubiese dado respuesta de fondo, completa y congruente con lo peticionado, y notificado a la ciudadana en legal forma lo decidido, por lo que se tutelaré al respecto.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses allegó informe (pdf. 023) aduciendo que mediante oficio n° 477339 del 04 de mayo del 2021 se brindó respuesta a la ciudadana así *“que las actuaciones que realiza esta institución proceden únicamente por mandato expreso de la autoridad competente y por tal razón esa entidad no se encuentra facultada para entregar algún tipo de información contenida en informes periciales toda vez que poseen carácter de reserva y hace parte de una investigación que dirige la autoridad que lleva el proceso, sin embargo, se informó que una vez revisadas las bases de datos de esta entidad desde el año 2004, no se encuentran valoraciones médico legales practicadas a la señora (...), que si las valoraciones tienen mayor antigüedad deben ser buscadas manualmente, por lo que se requeriría de más datos que faciliten la búsqueda como la unidad donde fue atendida por y la fecha aproximada de la misma”,* a su turno afirma que la citada comunicación fue notificada a la dirección de correo electrónico ana62janeth@gmail.com el 06 de mayo de 2021.

En el sub examine, si bien el Insituto Nacional de Medicina Legal rinde informe, el mismo se limita a indicar que emitió respuesta de fondo a la solicitud, sin nisiquiera aportar copia y menos aún prueba de haberla notificado en legal forma a la ciudadana. En virtud de lo anterior este Despacho Judicial considera que le ha sido vulnerado el derecho fundamental de petición a la accionante, al encontrarse acreditada la radicación de su solicitud hace más de treinta (30) días, sin que el Insituto Nacional de Medicina Legal hubiera acreditado haber dado respuesta de fondo a lo petitionado y haber notificado a la ciudadana en legal forma lo decidido, por lo que se tutelaré al respecto, ordenando a dicha autoridad dar respuesta de fondo a la solicitud elevada por la ciudadana con número de radicado 2021DG-GNSC00962. En este sentido, y toda vez que obra en el expediente oficio de fecha 11 de noviembre de 2013, por medio del cual la Comisaría Décima de Familia de Engativa 1, remite a la actora al Instituto de Medicina Legal con el fin que se le practique examen médico legal (pág. 24, pdf. 003), se ordenará que por secretaría se remita copia de la comunicación a la accionada para que tenga en cuenta dicho documento al momento de emitir respuesta.

De otra parte, la Policía Nacional -Metropolitana de Bogotá en la contestación arrimada (pdf. 026) señala que mediante comunicaciones n° GS-2021-228345-MEBOG y n° GS-2021-231810-MEBOG del 4 de junio y 7 de junio de 2021, respectivamente, dio respuesta a la solicitud radicada el 20 de mayo de 2021 y que da origen al trámite constitucional (pág. 4 a 8, pdf. 026).

En efecto, obra en el expediente, aportados por la actora, oficios n° GS-2021-228435 y GS-2021-231810 del 04 y 07 de junio de 2021 respectivamente, en donde se indica que previa búsqueda en los acervos documentales del CAI Santa María del Lago NO se encuentran escritos y/o documentos que hagan referencia con lo solicitado, en el mismo sentido afirman que previo traslado a la Oficina de Gestión Documental de la solicitud, mediante oficio n° GS-2021-228345-MEBOG la citada dependencia informa *“esta oficina realizó la búsqueda minuciosa (...); en donde NO se logran encontrar los escritos y/o documentos a los cuales se hace referencia...”*. En este orden de ideas, si

bien dicha respuesta genera malestar en la ciudadana, debe aclararse que la naturaleza y el alcance del derecho fundamental de petición se concreta en la pronta respuesta por parte de la autoridad a quien se dirige la solicitud, y en el derecho que le asiste a la solicitante a que la misma sea de FONDO, sin que ello implique que el sentido de la decisión sea FAVORABLE a sus pedimentos, máxime cuando no obra en el plenario prueba alguna mediante la cual se pueda deducir o inferir que en efecto exista registro documental en los archivos de la accionada; motivos suficientes para negar el amparo de tutela frente a la Policía Nacional.

A su turno, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en respuesta visible en archivo pdf. 027 del expediente digital, indica que frente a la solicitud con número de radicado 1762562337, los días 6 y 21 de mayo y el 7 de julio de 2021 se brindó respuesta a la ciudadana, informándole que la solicitud sería trasladada a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, considerando que estas son las entidades competentes para resolverla, al respecto, si bien la actora considera que el ICBF no brinda respuesta de fondo a su solicitud, debe aclararse que su solicitud se encamina en obtener copia de las denuncias o reportes relacionados con la violencia doméstica de la que fue víctima, y que el accionado es una entidad que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, infancia y adolescencia; en este sentido, considera esta juzgadora que no fue desacertado direccionar la petición a las entidades que en efecto tienen competencia para conocer del asunto, en concordancia con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015¹, por lo cual se negará el amparo frente a la citada entidad.

Finalmente, en cuanto a la presunta vulneración al derecho al acceso a la administración de justicia por parte de las entidades, no se encuentra acreditado dentro de las presentes diligencias que las mismas hayan atentado contra este derecho, incluso, no se halla relación entre la naturaleza del derecho incoado² y los supuestos que sirvieron de fundamento a ésta acción.

DECISIÓN

En mérito de anteriormente lo expuesto, la Juez Cuarenta Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad constitucional,

¹ *Funcionario sin competencia.* Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remitido al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.

² *El derecho a la administración de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes.*

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por la señora [REDACTED] [REDACTED] frente a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Policía Nacional de Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora [REDACTED] [REDACTED] frente al Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Fiscalía General de la Nación.

TERCERO: ORDENAR al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -área de PQRSD- y a la Fiscalía General de la Nación – Dirección de atención al usuario Davita - Grupo de peticiones de información sobre procesos penales de Paloquemao- o dependencias encargadas, que en un término de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, procedan a dar respuesta de fondo y completa a lo solicitado por la actora con número de radicado 2021DG-GNSC00962 y 20216170389142 respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia y a notificarle en legal forma su contenido. **Por secretaría REMÍTASE al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses COPIA** del oficio de fecha 11 de noviembre de 2013 visible a página 24 del archivo pdf. 003.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito, del contenido de esta sentencia.

QUINTO: Si este fallo no fuere Impugnado, **REMÍTASE** el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual Revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUISA FERNANDA NIÑO DÍAZ

JUEZ

GMG

Firmado Por:

Luisa Fernanda Niño Diaz

Juez

Laboral 040

Juzgado De Circuito

Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

0fc35a71bfa477a5b1f5ad5847d36b5200cb5725d8e36e8eafd68c99a10ff458

Documento generado en 08/09/2021 09:54:44 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>